

¿PRESIDENTE O MINISTRO DEL NO?

La renuncia de Germán Martínez al IMSS ha generado varias lecturas. La más común es que la austeridad presupuestal instrumentada por la SHCP ocasionará pronto una crisis en el sistema de salud. Las causas de la dimisión podrían ser más problemáticas que esto.

El Presupuesto de la Federación de 2019 fue prudente al plantear un aumento de gasto de 4 por ciento en términos reales, comparado con el de 2018. Ciertamente es un presupuesto frugal, pero más que limitar excesivamente el gasto público lo que hizo la SHCP fue reacomodarlo entre las dependencias y los mayores recortes no están en el sector salud, a pesar de los estridentes reclamos de los últimos días. Otras secretarías que cumplen funciones sociales importantes padecieron una guillotina fiscal más severa: a Semarnat le redujeron el presupuesto anual en 36 por ciento en términos reales; a Sagarpa en 30 por ciento y a SCT en 24 por ciento con respecto a los presupuestos de año previo. En el papel, a la Secretaría de Salud le redujeron su dotación presupuestal en 3 por ciento real y, en contraste, al IMSS se lo acrecentaron en 6 por ciento. Simultáneamente, otras dependencias se favorecieron con más recursos que en el pasado. El presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario se elevó 8 por ciento real; el de la Defensa Nacional 11 por ciento; Sedesol 40 por ciento; Turismo 116 por ciento; Trabajo y Previsión Social 932 por ciento y Energía 962 por ciento.

La reasignación del presupuesto entre las distintas entidades de gobierno fue obligada por la convicción gubernamental de no incrementar la deuda pública en más de \$500 mil millones de pesos este año, a fin de no desestabilizar financieramente al país.

No tengo claro quién es el verdadero arquitecto de esta firme disciplina fiscal. ¿Es el Presidente de la República el que le ha leído la cartilla en esta materia a su Secretario de Hacienda, o

es este último el que ha convencido a AMLO que el gobierno no tiene más espacio para endeudarse? La distinción no es trivial y podría determinar el curso de las finanzas gubernamentales y especialmente el de las finanzas de los hogares mexicanos (que son las más relevantes), durante el resto del sexenio.

Los gobiernos de los 1970's y 1980's tuvieron ministros hacendarios muy respetables que eventualmente se convirtieron en "ministros del no" fallidos, esto es, que trataron de resistir infructuosamente las presiones para elevar el gasto público que ejercían sus compañeros de gabinete y los presidentes en turno.

Con Echeverría fue el caso de Hugo Margáin; con López Portillo, Julio Rodolfo Moctezuma y con De la Madrid, Silva Herzog. Todos ellos terminaron arrollados por las imposiciones del momento y desterrados políticamente. Sus sucesores expandieron el gasto y la deuda gubernamental culminando con las mega-crisis de 1976, 1982 y 1987.

En los últimos 50 años también ha habido un "presidente del no" (Zedillo) y un "ministro del no" (Francisco Gil), exitosos en reducir los pasivos gubernamentales durante toda su gestión sexenal. En sus mandatos respectivos los servicios públicos padecieron los efectos de la austeridad, pero no generaron una crisis de servicios públicos como la que se perfila de continuar la absurda recomposición y suministro del gasto público actuales.

Si Carlos Urzúa intenta ser un "ministro del no", inflexible, en un entorno de desaceleración económica y de presiones políticas y sociales crecientes, podría padecer el destino de sus antecesores de los 1970's y 1980's y el país quedar expuesto a un relajamiento de gasto y déficit público que eventualmente desestabilizaría la economía.

Por su parte, si AMLO se aferra al rol del "presidente del no" y no recapacita en las consecuencias de su política de gasto público --de derroche en obras de dudoso beneficio y

programas de gobierno cuestionables-- el país se perfila a una insuficiencia de cantidad y calidad de servicios públicos no vista desde principios del siglo pasado.

Socio Fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados.